

Las crisis de las democracias en Latinoamérica

*Edelberto Torres-Rivas**

Democracias con y sin crisis

El título mismo, que se me ha solicitado, contiene el vicio moral del prejuicio. ¿Por qué afirmar la crisis de la democracia? ¿Es acaso, en América Latina, su manera de ser? Hay dos motivos para que no nos gane el ánimo el pesimismo académico. Uno, si las democracias están en crisis es porque en toda la región hay democracias, lo que nunca antes ocurrió desde que en el siglo pasado ella fue una contingente posibilidad histórica. Es causal de optimismo la generalización de experiencias democráticas porque hace 25 años sólo habían cinco regímenes susceptibles de calificarse así. El otro motivo es que hay en América Latina regímenes democráticos que van bien, unos cuya conducta electoral se ajusta a cualesquiera de las arduas definiciones instrumentales al uso; se estabilizan y ganan institucionalidad. No están en crisis ni Uruguay, Chile (que acaba de perfeccionar su régimen parlamentario, completando su transición) Colombia, Costa Rica y México. Son democracias que han experimentado episodios de ingobernabilidad pasajera que no alteran la estabilidad del Estado democrático, especialmente este último país.

En América Latina el proceso de instauración/restauración democrática para mantener la figura de Huntington, no fue una ola lenta sino casi una explosión de cambios. Ocurrió en un período de tiempo aproximado de unos quince años, que empieza con los procesos de transición en la región andina, Ecuador (1976/79), Perú (1975/80),

* Guatemalteco. Sociólogo. Estudios de postgrado en Chile e Inglaterra. Investigador en el área de desarrollo social en la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- (Chile), ISUNAM (México). Director del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del CSUCA y Secretario General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-. Profesor en diversos países de América Latina. Fundador y Director de las revistas *Estudios Sociales Centroamericanos* y *POLEMICA* y actualmente Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- e investigador asociado a FLACSO-Sede Guatemala. Ha escrito numerosos ensayos y publicado una docena de libros sobre temas de sociología política acerca de Centroamérica.

Bolivia, (1979/82); en el medio, República Dominicana (1978); luego continúa en El Salvador, Honduras y Guatemala (1980-85) y se traslada a la América del Sur, Argentina, Brasil y Uruguay (1983/85) y finalmente entre 1989/90 se suman Chile (1989), Nicaragua, Paraguay y Panamá (1990). Y por último Haití, en 1995¹. De los quince países, sólo en cuatro había condiciones para que se produjera una transición blanda y exitosa. Los otros once no tenían ni tradición democrática ni los supuestos estructurales para que su instauración fuese –junto a otros factores– una posibilidad cierta.

Las condiciones que facilitan empinarse hasta la edad adulta del sufragio universal y la ciudadanía política extensa y participativa, están asociadas a un cierto nivel de desarrollo social. La Sociología de la Modernización lo analizó y lo recetó de esa manera, argumentando algo así como la entrada a la modernidad. ¿Qué significa tan gastado adjetivo calificativo? Varios logros que no es difícil valorar con afán proléptico: tener una población mayoritariamente alfabeta, más educada, predominantemente urbana, participativa en la vida pública, mejor informada, sensible a los asuntos públicos. Que en su configuración estructural, sobre todo el interior rural, las desigualdades hayan disminuido y el resultado más importante haya sido la expansión de las clases medias cuyos intereses políticos son proclives a la participación política, al uso pleno de sus derechos sociales y civiles.

El crecimiento económico y las diferenciaciones sociales crearon fuertes movimientos de organizaciones clasistas, a la cabeza de las cuales estuvo un poderoso movimiento sindical. La democracia liberal, en parte, es una victoria del movimiento obrero y popular. Ganaron el respeto a la libertad de prensa y respeto a los derechos humanos, para que después de los derechos políticos, también se respeten los civiles y sociales. *¿Es políticamente incorrecto afirmar que muchos de esos países no estaban preparados para la democracia?* No importa, pues esas once sociedades son desde entonces, regímenes de democracia electoral. Y como ya puede irse intuyendo es en las *democracias nuevas* donde las crisis aparecen con mayor frecuencia.

Antes de analizar lo que ocurre en esas democracias es oportuno recordar cuatro rasgos generales, comunes, que están en los inicios de la democratización en América Latina y que pueden ser “pecados capitales” que se vuelven factores de crisis. *Uno*, es que la explosión

¹ O. Alvarez, J. Rial y D. Zovatto, América Latina: Balance del período electoral 92.96, en J. Rial y D. Zovatto, (ed.) *Urnas y Desencanto Político, elecciones y democracia en América Latina*, IIDH/CAPEL, San José, 1998.

de cambios políticos de carácter antiautoritario, que ocurren como por contagio en un relativamente corto período de tiempo, dejan algo más que sospechas que hay una visible prisa², desde el exterior, a favor del cambio de régimen. Fue la política exterior de los Estados Unidos a la cabeza de un grupo de democracias europeas las que ‘globalizaron’ su propósito de acabar con las dictaduras. En buena parte por el fin de la guerra fría, en otra, por el colapso del comunismo. *El segundo*, en sintonía con el anterior, es que los cambios se producen como resultado de decisiones de una élite política local no siempre con credenciales democráticas, pero impulsadas a hacerlo por una oficiosa oferta de colaboración internacional y por ello con total independencia de las condiciones económico-sociales locales.

Tercero, estas transiciones gratuitas empezaron inequívocamente con elecciones para asambleas constituyentes y/o presidenciales, que satisficieron las mínimas condiciones discretas de la fórmula instrumental de la democracia electoral. La restauración del sufragio/escrutinio limpio con técnicas importadas fue la complacencia de una formalidad con efectos fundadores, un rito político que califica por sí mismo a las elecciones como democráticas, las que transmiten esta cualidad a los regímenes, que son entonces, democráticos. Varias democracias, satisfechas de la rutina electoral, se quedan ahí. Y, *el cuarto* y último rasgo común es que el regreso de los (políticos) civiles recuerda la salida del tablado político de los militares, que cargando un desprestigio con variados niveles de deshonra, vuelven a los cuarteles a esperar. Con variable obediencia experimentan la excusa de su modernización técnica, soportan callados cuando los políticos hablan de las teorías del nuevo papel del ejército, ven crecer la inseguridad y esperan el llamado civil.

¿Qué es lo que está en crisis?

El abuso del concepto de crisis en las ciencias sociales y en el ambiente público vulgariza sus contenidos y dificulta el análisis.

² Esa es la impresión que deja la experiencia panameña. Las tropas norteamericanas llegaron con el doble propósito de capturar a Noriega y colocar en el gobierno al Sr. Endara. El operativo costó del lado panameño casi 3 mil víctimas del barrio de Chorrillos y la destrucción del mismo. Al Sr. Endara, supuesto ganador de elecciones que los militares se negaron a reconocer, le dieron posesión del Ejecutivo, en un acto precipitado, que ocurrió en la todavía norteamericana Zona del Canal. Igual cosa ocurrió con la democratización haitiana, donde la invasión norteamericana fue el instrumento para colocar al frente del gobierno al señor Aristide.

Entre los griegos ‘crisis’ era el fin problemático de un período, la agonía que pone fin a algo que luego resurge cualitativamente mejor. En el marxismo de los años de su vulgarización, los 60’s/70’s, con visión apocalíptica se calificaba como crisis (del capitalismo) a las dificultades objetivas para la reproducción del sistema, como expresión de contradicciones entre fuerzas sociales y modo de producción.

En la retórica del neoliberalismo duro, del pensamiento mágico que PRODDAL llama así porque nunca busca probar sus afirmaciones dándolas por verdades naturales, *la crisis es todo rasgo, práctica o recuerdo del pasado inmediato que amenaza con volver*. O que por su inercia, aún no se ha ido. Es peligroso el regreso (¿hasta el recuerdo es temido?) del desarrollismo en que el Estado regulaba el mercado y hacia política, del sindicalismo independiente que negociaba las condiciones de trabajo; de las tendencias asociativas, de las luchas sociales que buscaban imponer un nuevo orden, de los partidos políticos articulados con los movimientos populares, de las luchas por la tierra, de los cristianos de base... Es crítica toda práctica económica que hace perder competitividad, que reduce la ganancia, que desluce la gestión empresarial. La noción de crisis como amenaza al *status quo*.

Como podrá verse más adelante, en el escenario de las apariencias de lo cotidiano, las manifestaciones visibles, epidérmicas, de las crisis de la democracia, son múltiples y hasta originales. ¿Cuál es el problema básico de la democracia en América Latina en esta época? ¿Cuál es la causa genérica del desasosiego? Elaborado con elementos de su propia lógica, el problema se constituye como una creciente contradicción relativa entre la naturaleza vigorosa del capitalismo globalizado con el modelo político de la democracia participativa. El mercado empobrece y al redistribuir de forma inequitativa la riqueza crea desigualdades en el uso del poder, ciudadanos de segunda clase. El efecto, que ya no es subliminal, es que la economía busca subordinar a la política, debilitar al Estado, propiciar una democracia de baja intensidad.

La crisis que experimenta la democracia es la tensión expresada en el juego participatorio, entre el mercado libre, cuyo vigor se basa en la multiplicación del consumidor solvente y la democracia liberal cuyo fortalecimiento se apoya en la expansión del ciudadano activo. Se prefiere a personas con muchas tarjetas de crédito en su vida privada y no a militantes diestros en el reclamo de sus derechos en la arena pública. La paradoja está planteada: el neoliberalismo ‘achica’ la sociedad en esta época en que debe ampliarse la ciudadanía; con las nuevas democracias crece la sociedad civil, y se ‘produce’

un voluminoso asociacionismo reivindicativo. En las situaciones confrontativas, límite, la crisis aparece como descontento y reclamo político frente al Estado democrático, cuya funcionalidad disminuida acentúa por momentos la fuerza de las demandas o el malestar. *La crisis de la democracia es la crisis del Estado Democrático y éste es el parámetro con el que juzgamos los dos tipos de crisis, agónica o malestar por la baja gobernabilidad.*

Hasta este momento, el ideal político del neoliberalismo no es la dictadura militar. El status quo estable es una plena gobernabilidad, pues donde mejor se establece la múltiple vinculación de la crisis política como debilidad del Estado democrático es en *el tema del orden como garantía de la reproducción sistémica*. Es esta una referencia al cumplimiento del ideal primario de todo sistema político, la salvaguardia del orden social en condiciones de legalidad, inclusión y tolerancia, vale decir, el mantenimiento de la gobernabilidad democrática. En muchas de las crisis de la democracia en el subcontinente la ingobernabilidad aparece como el desequilibrio entre lo que los ciudadanos esperan como despliegue de sus derechos y las políticas que el Estado genera como respuesta del poder democrático. Es como un puente de doble vía, en la alegoría de Offe, en cuyo interior circula un tránsito que es fluido si todos cumplen las reglas del juego. En ese enfrentamiento se mide el vigor de los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil frente al Estado y la coalición del poder, capaces de satisfacer desde el espacio público sus fines de bien común.

La versión neoliberal refuerza el mercado como el núcleo constitutivo de la sociedad civil, de lo privado y debilita la función del Estado como el núcleo básico de lo público, convirtiendo la gobernabilidad en *respuestas técnicas y no políticas, económicas y no sociales*. El ciudadano empobrecido se aparta de la participación política en una democracia que así ya no se expande; pero el retraimiento sólo es una respuesta de adaptación anómica y puede suceder que decida comprometerse como actor de conflictos políticos y participe organizándose, luchando por un cambio de situación.

¿Las crisis son luchas contra la democracia? Aparentemente así es, sin que por ello se juegue a la contingencia de una regresión autoritaria. Manejemos la hipótesis de que el desarrollo de las crisis, en estas circunstancias, ocurre no como crisis contra el Estado democrático sino en su interior. O como lo dice el Director del Informe PRODDAL, “no

hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia”³. La noción de gobernabilidad puede caber en esta última.

Crisis de expresiones diversas

En los últimos diez años ha habido nueve presidentes constitucionales que han debido abandonar el cargo antes del tiempo legal. Su salida, sin duda, es efecto de un malestar. Pero todos fueron sustituidos con apego a la Constitución, con diversos grados de manejo institucional y jurídico. Ciertamente, dejar el alto cargo en estructuras presidencialistas como las nuestras, resulta ser un dato crítico de diversa calidad, como también puede serlo si no lo deja. Se analizan a continuación dos tipos de situaciones diversas. Unas que desbordan el sistema político, al que finalmente rechazan; otras, que se mueven en su interior, donde se resuelven. Las primeras son las crisis políticas que en su declive desordenador se convierten en crisis griegas, agonía del orden social o el final de un período, de un tiempo histórico que afecta al Estado en su conjunto. En el último quinquenio, Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití son ejemplos conspicuos de esas crisis terminales. Las segundas, han sido crisis políticas que en su desarrollo se mantienen en el interior del Estado democrático y se resuelven sin debilitarlo, son manifestaciones de ingobernabilidad. Brasil, Costa Rica, México, Santo Domingo, (y en la frontera analítica, Nicaragua) pueden ser modelos apropiados.

Brasil aparece desde el 6 de junio del año en curso en un escándalo de corrupción que implica a la alta dirigencia del Partido de los Trabajadores y que pareciera ir en espiral a medida que pasan los días: desde esa fecha aumentan los culpables. Los medios de comunicación se han hecho cargo de magnificar los hechos y la oposición política de aprovechar lo que sin duda conforma una crisis institucional sólo potencialmente peligrosa. Una breve revisión de los hechos lleva a recordar la denuncia hecha por un aliado del PT, Roberto Jefferson, diputado del Partido Trabalhista Brasileño sobre que el PT venía pagando 13.000 mil dólares mensuales a congresistas de partidos aliados. Es una práctica que ocurre en casi todas partes del mundo. Tal vez el monto y el origen de los fondos resulte inaceptable. Ninguno de los legisladores ha admitido el soborno, pero la denuncia apuntó hacia la figura más importante del gobierno, después del Presidente Lula, el Ministro jefe del Gabinete o Ministro de la Presidencia,

³ Del Director del Informe, Dante Caputo, en *La Democracia en América Latina, Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*, PNUD, Bogotá, 2004.

José Dirceu. Sucesivamente se retiraron aumentando los decibeles del escándalo, el dirigente más destacado del PT, su Presidente José Genoino, el tesorero Delubio Soares, el Secretario de Comunicaciones Marcelo Sereno y el Secretario General del Partido, Silvio Pereira.

Se trata de actos de corrupción –compra de favores– de tono menor, pero que se producen desde el partido-de-gobierno y que resultan insoportables porque el PT es una presa fácil frente al ensañamiento opositor. Este partido construyó su prestigio político en gran parte manejando campañas de “moralización” de la vida pública y marcando distancia con todos los demás partidos por su conducta rígidamente ‘ética’. Contribuyó a la constitución de la crisis un artículo del expresidente F. H. Cardoso en que recordaba la caída de Joao Gulart (1964) y el *impeachment* de Fernando Collor de Melo (2002) por corrupción aguda.

Se invoca un supuesto “mar de lodo” en que Brasil se estaría sumergiendo. (Cuando se escriben estas notas) la espiral de la crisis puede seguir ascendiendo, pero hay tres razones que ayudan a ponerla en su sitio. Por un lado, aparece claramente como *una crisis del partido de gobierno*, corruptor, para asegurarse mayoría en el parlamento, encabezada por algunos de sus altos dignatarios, lo cual revela un abuso de poder y un juego con la moral pública. Por el otro, es una crisis institucional pero de carácter limitado pues no ha afectado ni al poder legislativo ni al Presidente Lula, cuyo trabajo ha sido evaluado en mayo en un 39.8% y en julio, en medio de la tormenta, en un 40.3%⁴. La economía da vigorosos signos de salud y el conjunto del Estado parece ajeno al huracán que la prensa y la TV alimentan con pasmosa maldad. Y una tercera proposición, es la relativa a la debilidad parlamentaria del PT como fuerza gobernante, que ha debido aliarse a fuerzas conservadoras para salir adelante. De hecho antes del escándalo y luego a raíz del mismo, el Presidente Lula buscó ampliar su apoyo parlamentario con sectores de la derecha e invito al PMDB, socialdemócratas de centro derecha para ocupar 4 ministerios. Así, el programa del Partido se degrada y el Presidente se podría convertir en un prisionero de la derecha voraz.

En resumen, la debilidad política del PT en el gobierno fue lo que constituyó el pivote de la crisis, pues los actos de corrupción afectan al partido y a la posibilidad reelectoral del presidente Lula. *No hay*

⁴ Instituto de Opinión Pública Sensus, en *Siglo XXI*, Guatemala, 17 julio 2005, p. 17.

crisis de la democracia ni del Estado de Derecho. Sólo el agotamiento del liderazgo de un partido de izquierda cuyas ‘metidas de pata’ la extrema derecha aprovecha con histórico talento. Es esta, una profunda crisis de un programa progresista y de un partido que surgió como la gran alternativa latinoamericana en sociedades de una larga tradición antipopular y autoritaria. Por último, una situación de ingobernabilidad, que por definición es transitoria, que parece amainar. La elección de Tarso Genro como presidente del PT y la renovación de la dirección y del discurso progresista han bajado el encono enemigo, aunque así no parezca.

En *República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua* hubo o hay síntomas de crisis por el asunto de la corrupción. Próximo al clientelismo como fenómeno degenerativo de la vida pública se encuentra el de la *corrupción*, que tiene diversos rostros y por ello es de difícil definición. Han quedado descartadas las perspectivas que asociaban la corrupción como un fenómeno propio de regímenes atrasados o bien, no consensuales, lo cual supondría (falsamente) que en Estados modernos y/o democráticos no se produciría. La corrupción necesita de un sistema normativo dentro del cual se produce el acto delictivo, de una autoridad, un ‘decisor’ como argumenta Garzón⁵, y de un beneficio no siempre económico por favores recibidos u omisiones logradas. El tema de la corrupción política se ha generalizado, es una moda que enferma a güelfos y gibelinos, pero su importancia no radica tanto en la magnitud del fenómeno cuanto *en su carácter de síntoma de males más graves y profundos*. El problema es que por factores de contagio y visibilidad, en democracia, pareciera estarse generalizando.

Pero no siempre es así. En varios países y casos, se infla el fantasma de la corrupción. Aparte de su carácter polisémico, en el último tiempo se le ha mitificado percibiéndola como algo fuera de control. Se le utiliza como escándalo público para involucrar personalidades políticas. Los medios linchan a las figuras públicas que les disgustan con el fuego perverso de una acusación de corrupción, a veces basada en la sospecha. Algunos estudios se vienen haciendo, que prueban que en el último tiempo algunos sistemas judiciales nacionales, no sin

⁵ El ‘decisor’ es una autoridad con competencia para decidir, es decir, un funcionario con poder. Ernesto Garzón Valdés, *Acerca del concepto de ‘corrupción’*, en *Claves de Razón Práctica*, No. 56, Madrid, 1995, p. 56.

sobresaltos, están tramitando por la vía institucional esos contenciosos, siendo capaces de imponer sanciones ejemplares⁶.

Muchos países de la región han experimentado este grave daño a la moral pública y a la credibilidad democrática. Su existencia es real pero su medición es dudosa pues depende mucho del escándalo público que los medios de comunicación realizan y cuya imparcialidad siempre es cuestionable. *En República Dominicana no hay crisis del Estado Democrático, que es la dimensión pertinente bajo análisis.* Tiene problemas el Partido de la Revolución Dominicana (PRD), fuerza política fundadora de la democracia isleña, el Partido de Peña Gómez, en descomposición durante la reciente presidencia de Hipólito Mejía que vivió uno de esas complicidades bancarias que dejan dinero y que quiso de manera absurda reelegirse. Se trató de uno de esos complejos manejos financieros tras los cuales la burguesía realiza enormes negocios ilícitos.

No hay corrupción si no se publicita y la pudrición de clase alta casi siempre se ignora. No tiene signos repugnantes y el *ethos* que la anima no molesta si quien roba es un alto empresario. Pero no ocurre así con los arribistas de clase media, pobretones, que practican el ejercicio callejero de ‘carteristas’ al estilo de los expresidentes Portillo o Alemán. Este último sumió a Nicaragua en un largo episodio de ingobernabilidad, pues fue un ladrón desmesurado, insolente, que con desvergonzada publicidad, como albacea y heredero de la tradición somocista se quedó con más de 100 millones de dólares⁷ en un país que tiene el PIB per cápita más humillante, salvo Haití.

En *Nicaragua* se fomenta una crisis política que puede interesar al Estado democrático en tanto se desarrolla como una tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Como inesperada paradoja, el enfrentamiento entre el Presidente Bolaños y los dos Partidos de oposición es resultado de una distensión oportunista entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista, enemigos políticos casi por fuerza de la historia, que firmaron un pacto a fines de 2004 que les permitió reformar la Constitución utilizando su mayoría en el Congreso. Desde ahí han

⁶ Francisco Nieto, “Desmitificando la corrupción en América Latina”, en *Nueva Sociedad*, No. 194, Caracas, 2004, pg. 94 y sigs.

⁷ Es prudente decir que se trata de una cifra imprecisa que la prensa local e internacional repite. Es probable que sea menos o más, pero el juicio que tiene en la cárcel a Alemán, probó una apropiación cuantiosa de recursos públicos en una de las sociedades más pobres de América Latina.

empezado a minar el poder administrativo de su común enemigo, el presidente Bolaños. El acuerdo firmado entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán –izquierda y derecha nicaragüense que hace diez años se mataban entre sí– no correspondería condenarlo moralmente pues en la naturaleza de las cosas la objetividad sólo permite decir que su decisión no favorece la vida democrática. Una alianza política es parte del juego democrático, pero no lo es si el pacto es un instrumento mendaz para debilitar, politizando, las instituciones del Estado democrático; para repartir influencias con ánimo corruptor, como lo demostró abundantemente el expresidente Alemán.

La Asamblea nicaragüense ya eligió bajo el esquema bipartidario a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (y del poder judicial), a los del Consejo Supremo Electoral y a los integrantes de la Contraloría de la República. Tales cuerpos colegiados están repartidos entre sandinistas y liberales, en un claro retroceso de la estabilidad y la imparcialidad institucional. La Asamblea además decidió vetar los nombramientos de Ministros del Gabinete del Ejecutivo y los cargos diplomáticos, cercenando así las funciones del presidente Bolaños⁸. La crisis terminó de constituirse en mayo de 2005 cuando la Policía Nacional no sabe a quién obedecer y el diálogo entre Enrique Bolaños y sus opositores se interrumpió. *Lo político partidario por encima de lo jurídico nacional*. Hay parálisis de gobierno con efectos inmediatos en la vida económica. La OEA ha intervenido y ya encontró serios obstáculos para resucitar un diálogo fracasado. No obstante, la crisis se plantea en el interior del Estado Democrático, en donde la negociación política y no la cuestión jurídica es la solución. Una típica crisis de gobernabilidad, que casi constituye una manera del ser histórico nicaragüense.

Finalmente *Costa Rica*, ejemplo de otra modalidad de *crisis en la democracia*, asunto menor en la óptica latinoamericana pero experimentada localmente como un desajuste mayor que amenaza con centroamericanizarse. Concurren aquí dos hechos distantes pero sincrónicos. Uno, las acusaciones de corrupción que condujeron al arresto preventivo de los expresidentes Rafael Angel Calderón Fournier (1990/94) y Miguel Ángel Rodríguez (1998/02) y otros funcionarios públicos, pertenecientes al PUSC, socialcristianos de derecha. Se incluye el desacato del expresidente José Figueres Olsen (1994/1988),

⁸ En la distribución de cuotas de poder, se le concedería al Ejecutivo la presidencia del INSS, para el FSLN el Instituto de la Propiedad (INPRUR) y para el PLC, la Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP).

socialdemócrata neoliberal, al no presentarse al llamado de la Asamblea Legislativa para ser interrogado. Se vive un clima opresivo de sospechas de corrupción por todos lados, con lo que se refuerza el otro dato crítico, la difidencia generalizada en los asuntos de la vida pública.

En efecto, el otro hecho maligno de la coyuntura es el decreciente apoyo al sistema democrático del hombre de la calle, que se manifiesta en múltiples encuestas de opinión y en la comprobada desconfianza ciudadana con los partidos políticos, los programas, los liderazgos y las elecciones mismas. En las elecciones de 2002 el *abstencionismo* subió al nivel record del 39%. Las últimas encuestas prefiguran para las de febrero de 2006 una ausencia mayor, provocando ya los síntomas que describe José Saramago en el *Ensayo sobre la Lucidez*. El periódico *La Nación* publicó (14/12/04) que el número de indecisos pasó del 5% a 53% entre julio y diciembre de 2004⁹. ¿Producen ambos fenómenos, pudrición y difidencia, un síndrome profundo de crisis del poder democrático? Es dudoso, aunque puede conducir, de profundizarse y afectar las estructuras subjetivas de la política, a una crisis de gobernabilidad. Los problemas que experimentan el bipartidismo y la reducción del papel del Estado, pilares de la democracia, la ponen en duda, según algunos. Pero lo que ocurre en Costa Rica no es una crisis ni en el interior de la democracia ni del Estado democrático. Es un reacomodo de fuerzas sociales y económicas que tiene efectos disruptivos en lo político, en una sociedad vigorosamente democrática.

Examinemos ahora la otra versión latinoamericana de la crisis, la terminal, que hemos calificado como la modalidad griega de la agonía del sistema en su conjunto. Ni toda democracia es enferma ni sus crisis son resultado de los mismos gérmenes. Es útil para esta presentación buscar los ejemplos extremos, ahí donde la noción de gobernabilidad se pierde por insuficiencia explicativa. Ha habido en los últimos años situaciones que sitúan al Estado en la periferia de su capacidad funcional, pues más allá deja de funcionar su estructura de cohesión y control y abandona a la sociedad sin posibilidades de autorregulación. Una crisis como la que experimentó Argentina a comienzos del milenio es una crisis total. Veamos luego la de Bolivia, que se expresa como una desagregación de los poderes constitutivos del Estado. Estos son casos que por ocurrir desde afuera de la institucionalidad estatal/democrática golpean más al Estado, a la economía, a la sociedad.

⁹ Dato tomado de R. Salom, "Los Procesos de Corrupción y las perspectivas de la democracia en Costa Rica", en *Nueva Sociedad*, No. 196, Caracas, 2004, p. 56.

En diciembre del 2001 la sociedad argentina experimentó un seísmo de larga intensidad. Las placas tectónicas de la economía y la política colisionaron. Una profunda recesión largamente gestada estalló finalmente bajo la débil conducción de la Unión Cívica Radical y el presidente De la Rúa. Fue inevitable que el hondo malestar social acompañara al desorden económico con crecientes olas de protesta callejera, violentas formas de rechazo al sistema político. El 13 de diciembre de 2001 una huelga sindical fue el disparo de salida y ya el 18 los saqueos empezaron; el 19 se generalizó la protesta popular en todo el país y hubo violentos enfrentamientos con la policía, que dejaron 35 muertes. El 20 de ese mes, el Presidente De La Rúa renunció como muestra de su ineptitud y del aislamiento político en las Cámaras, donde pierde su frágil mayoría.

A los efectos causados por el caos económico, como una honda rabia popular, se sumó la crisis política, con el Estado perdiendo las posibilidades de autocontrol del sistema, en plena bancarrota deslegitimadora de la autoridad pública. El Congreso de la Nación designó como presidente a Adolfo Rodríguez Saa, que renunció a los seis días, eligiéndose al senador Eduardo Duhalde, poderoso líder del Partido Justicialista, para completar el período de De la Rúa. Duhalde, a principios del 2002 anunció el fin de convertibilidad, la devaluación del peso y un cambio flotante que condujo a una severa crisis financiera, que culminó en una moratoria de pagos, devaluaciones caóticas, desorden monetario.

Todo ello provocó la más profunda depresión económica en la historia del país. La economía en recesión desde 1998 entró en depresión total. Con los bancos paralizados y sin asistencia internacional los efectos sociales fueron devastadores: el PIB se contrajo en un 16% en los primeros meses de 2002, el desempleo saltó al 25% y la pobreza subió al 51% (junio 2002); la política monetaria, conocida como “el corralito” produjo la pérdida de los ahorros de miles de ciudadanos¹⁰. La extensión de la crisis se manifestó como un remolino de desorden que rechazaba todo el sistema político. En el ¡que se vayan todos! había un germen de anarquía profunda activado por las masas movilizadas de forma espontánea y al margen de los partidos políticos.

Los ‘piqueteros’ aparecieron como un nuevo actor portador de una hostilidad tan generalizada hacia la elite política toda que llevaron

¹⁰ S. Levitsky and M.A. Murillo, “Argentina Weathers the Storm”, en *Journal of Democracy*, Vol. 14, No. 4, October 2003, p. 157 y sigs.

al sistema al límite del colapso, tal como el que años atrás ocurrió en Venezuela, primero y en Perú, después. Recordemos que Chávez y Fujimori obtuvieron ventajas de la crisis de los partidos, fundaron ‘movimientos’ populistas, negaron la institucionalidad ya deslegitimada y se instalaron en el poder ¡con enorme apoyo popular! Pero salvaron de la crisis a sus sociedades.

La crisis obligó a Duhalde a apresurar las elecciones, en diciembre de 2003. La anécdota esclarece pero prolonga esta exposición. A manera de epítome recordemos que la competencia electoral, normalizadora, se dio entre tres caudillos del Partido Justicialista y en la segunda vuelta se impuso Kirchner; el pueblo votante rectificó y ¡se fueron todos! menos los peronistas. Este, ha tenido un sorprendente éxito relativo, se acabó ‘el corralito’ y lentamente la sociedad se recupera, aún arrastrando por supuesto muchas de las causas que provocaron la crisis. No obstante, la castigada sociedad argentina ha demostrado mas salud que lo visible anunciaba y el Estado democrático empezó a funcionar, saliendo vivo de la trampa mortal del mayor desastre económico de su historia. Desafortunadamente no puede olvidarse el peso de la tradición autoritaria, desestimando, por ejemplo, que entre 1930 y 1983 hubo 14 golpes militares y solo un presidente electo –Perón– completó su período. ¿Ha sido superada la crisis? Por de pronto, como en Brasil, así parece, aunque no es parte de este trabajo ensayar predicciones, pues las ciencias sociales no son ciencias ocultas (¡aunque se parecen!).

En *Bolivia*, la crisis también tuvo una larga germinación, a pesar de que hasta Octubre del 2003, el país tuvo durante 18 años un período ininterrumpido de gobiernos democráticos, 5 presidentes elegidos libremente y en ocasiones a candidatos de la oposición. *Pero es sabido que ninguna democracia es irreversible*. En febrero del 2002 ocurrió un grave incidente que dio inicio a la inestabilidad en espiral que ya no se detendría, cuando la Policía rechazó un decreto presidencial elevando impuestos. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada llamó al ejército y en un batallar salvaje, de 48 horas, murieron 25 personas y quedaron centenas de heridos. La masacre ocurrió en un clima de problemas sociales no resueltos como la creciente pobreza entre los pueblos indígenas (Quechuas y Aymaras) con un alto nivel de organización; el tema del derecho a producir legalmente la hoja de coca, donde surgieron trabajadores organizados políticamente y dirigidos por el exitoso dirigente Evo Morales, cuyo partido resultó con un asombroso segundo lugar.

La protesta popular creció con la demanda de nacionalizar la producción de gas¹¹ por medio de un referéndum y la emisión de una nueva Ley de Hidrocarburos. El gobierno de Sánchez enfrentó las movilizaciones campesinas en El Alto, ciudad de paso a la entrada a La Paz con violencia militar, provocando un baño de sangre. Huelgas y nuevas protestas crearon una clásica situación de ingobernabilidad que obligó en Octubre de 2003 al Presidente a renunciar y huir. El poder pasó a un Parlamento fraccionado y con partidos perdiendo respaldo, en el seno de una sociedad en situación de desorden provocado por la movilización campesina. Fue electo como sucesor el vicepresidente Carlos Mesa, periodista prestigioso pero sin partido. La conmoción de la institucionalidad del país se hizo permanente y debilitó las tareas de gobierno. La política dejó de hacerse en el Parlamento, donde los partidos tradicionales se quebraron en medio de peleas por el poder, surgiendo los “transversales” que sin dejar al partido rompieron la lealtad partidaria, los orgánicos, los indígenas radicales y el MAS, de Evo Morales, que mantuvo la disciplina ideológica.

El tiempo político fue breve. El presidente Mesa asumió la llamada “Agenda de Octubre”, o sea modificar la Ley de Hidrocarburos, convocar a una Asamblea Constituyente y luego presidenciales¹². Limitado en su habilidad de gestión frente a un país complejo por sus reclamos contradictorios y algunos imposibles de satisfacer, la legitimidad del gobierno se fue erosionando rápidamente. Debe reconocerse que, al igual que en Brasil, la economía no se afectó, no hubo represión y la figura presidencial era más creíble que los políticos, los partidos, el parlamento, la policía y el ejército. La política de diálogo no funcionó y como expresión de una cruel paradoja los 18 años de democracia no hicieron sino debilitarla y en especial al parlamento que fue durante aquellos años la representación de la nación oficial. En 18 meses la crisis volvió y con más fuerza.

El tema que vertebró las movilizaciones que provocaron la caída de Sánchez fue la exigencia de “gas para Bolivia”, es decir, alcanzar alguna modalidad de nacionalización, no vender ni sacarlo por Chile y aprobar una nueva ley. El Presidente Mesa, jugando a la política menuda, con mil dificultades propuso su propio proyecto de Referéndum para

¹¹ Bolivia tiene las mayores reservas de gas en América Latina; una concesión se había hecho a favor de inversionistas extranjeros. También era motivo de descontento la posibilidad de construir una salida por Chile y vender gas a este país.

¹² J. Lazarte, “El fin de un Presidente a la deriva y un país al borde de la catástrofe”, en *Nueva Mayoría*, Bs.As., junio 15-5.

resolver así la controversia y definir una política estatal. El 18 de julio el país votó masivamente a favor de las preguntas, pero se fue transformando lo que fue un consistente triunfo para el gobierno en una derrota final, por efectos de sus propios enredos¹³. La batalla nacional por la 'interpretación' de las preguntas prueba la inopia de un Estado democrático débil: el Congreso se demoró 9 meses discutiéndolas, dividiendo de nuevo al país y empujándolo a la incertidumbre. Y envenenando las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. La crisis terminó de conformarse en junio de 2004, con las demandas de autonomía de la región oriental, ajena a la cultura andina, y donde Santa Cruz y Tarija son los centros económicos poderosos de Bolivia.

Conforme la tradición del país, el desorden ya había empezado, con fuerzas campesinas descontroladas paralizándolo en 54 puntos de bloqueo y con disímiles exigencias. Impotente para reaccionar sin ningún poder real, el presidente Mesa renunció a mediados de abril, la que no fue aceptada por el Congreso, pero la crisis se generalizó al punto que dos semanas antes de su renuncia final, la capital La Paz, quedó asfixiada por la toma de fuerzas sociales, paralizando la vida cotidiana en 100 puntos de bloqueo nacional, con una huelga general en El Alto y el enfrentamiento autonomista entre el Oriente y el Occidente de la nación. El 4 de junio se fue Mesa definitivamente. Su sucesión fue objeto, *a fortiori*, de inéditas expresiones de la crisis total del Estado Democrático. Se eligió no al Presidente del Congreso sino al de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez. Ningún factor crítico ha sido desmantelado, y las razones que condujeron casi al colapso están ahí: el conflicto entre el ejecutivo y el Congreso, el descrédito de los Partidos, la insatisfacción de los reclamos de los movimientos étnico-campesinos, las demandas autonomistas del oriente, la indecisión sobre qué hacer con la enorme riqueza del gas.

La crisis en *Ecuador* fue similar, pero no llegó a su fase agónica, terminal. Salió Lucio Gutiérrez contabilizando así a tres presidentes electos que no pueden terminar su mandato, forzados a renunciar en un clima de confrontación e inestabilidad política. Hay una cierta regularidad en la in/gobernabilidad ecuatoriana, en la que juegan un papel decisivo los nuevos actores políticos, las organizaciones indígenas. Salió Jamil Mahuad y lo sucedió su vicepresidente Gustavo Noboa, ahora se fue Gutiérrez y lo sucede, legalmente, el Presidente de la Corte Suprema. El componente parlamentario es toral para entender tanto la

¹³ J. Lazarte, *ibidem*.

crisis como la continuidad institucional. Gutiérrez jugó a la ilegalidad. Al buscar apoyo mayoritario pactó con un partido de oposición, que necesitaba una decisión judicial a favor de su caudillo. Removió a la Corte Suprema, de forma inconstitucional, para favorecerlo y así provocó un temblor de alta intensidad que finalmente lo obligó a irse. Fue electo por el Congreso, Alfredo Palacio, apolítico y presidente de la Corte. La experiencia ecuatoriana también enseña lo peligroso que es usar mayorías políticas en temas judiciales y con propósitos partidarios. La gravedad del asunto es la enclenque estructura partidaria y la descomposición de los apoyos electorales, la profunda desconfianza de una sociedad que reitera cada cierto tiempo la disfuncionalidad de sus actores políticos.

La democracia –como lo establece el Informe PRODDAL– es una manera de organizar el poder en una sociedad, con reglas que permiten competir por el poder en forma pacífica a través y sobre todo, de elecciones limpias y periódicas para escoger a los gobernantes y representantes de la ciudadanía. Son decisivos la naturaleza legal y el desarrollo de la ciudadanía. La democracia verdadera es algo más que elecciones. Es la expansión de la ciudadanía a sus dimensiones no sólo políticas sino civiles, sociales, económicas y culturales. La igualdad política no basta para crear en la misma medida la capacidad de participar en condiciones de igualdad, influir de la misma manera. Los desequilibrios en la propiedad de los recursos se reflejan en el poder político y socavan la finalidad de las instituciones democráticas. Vivimos en democracia con carencias sociales. La democracia política, en América Latina, convive con un Estado de derecho limitado y con serios problemas económicos y sociales. En 2003 la pobreza alcanzó el 44% y crecieron los niveles de desigualdad. No son éstas las mejores bases para la convivencia democrática, pero hay que seguir perfeccionándola. Una democracia con problemas siempre será mejor que una dictadura militar.